

NÚM. 36

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ACOSTA

32.^a Sesión ordinaria del 1.º de agosto de 1876

SUMARIO

I.—Asuntos entrados.

II.—Se resuelve no insistir en la modificación anteriormente introducida en el artículo 2.º del proyecto de ley, que vino en revisión de la cámara de diputados, aprobatorio del decreto del poder ejecutivo, prescribiendo que los jefes de las oficinas telegráficas ó los receptores de rentas, desempeñen las estafetas de correos en los puntos que en el mismo se mencionan.

III.—Iniciación del debate sobre el proyecto de ley en revisión, aprobatorio de las ordenanzas de aduana, proyectadas por la comisión nombrada por el poder ejecutivo para la revisión de las vigentes, aprobándose en general, y en parte, en particular.

SEÑORES

—
 Alvarez
 Arias
 Argento
 Bazán
 Bustamante
 Colombres
 Cortés
 Corvalán
 Echagüe
 Frías (L.)
 Frías (U.)
 García
 Gelabert
 Lucero
 Molina
 Navarro
 Oroño
 Rocha
 Vallejo
 Villanueva

En Buenos Aires, á primero de agosto de mil ochocientos setenta y seis, reunidos en su sala de sesiones, el señor presidente y los señores senadores al margen inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores Bárcena, Sarmiento, Pruneda y Gorostiaga con aviso, y ausentes de esta capital, con licencia, Torrent y Quintana y con aviso Rawson y Linares.

I

Leída y aprobada el acta de la anterior, del 29 del pasado, (31.^a ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, á saber:

Una nota de la honorable cámara de diputados, fecha 31 del pasado, comunicando haber aceptado las modificaciones introducidas por el senado, en el proyecto de ley que aprueba el decreto del poder ejecutivo por el que

se prescribe que los jefes de las oficinas telegráficas ó los receptores de rentas, desempeñarán las estafetas de correos, en los puntos que en él se mencionan, con excepción de lo que se refiere al Paso de la Patria, quedando en consecuencia el artículo 2.º de dicho proyecto en estos términos:

Art. 2.º La administración de correos de Belgrano, será servida por la oficina telegráfica del mismo punto.

Sr. Presidente—Yo creo que este proyecto puede tratarse sobre tablas.

Sr. Bustamante—Iba á pedirlo, cuando se acabara de dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Presidente—Entonces, lo reservaremos para después que se dé cuenta de los asuntos entrados.

—En seguida se dió lectura de otras tres notas de la misma cámara, y de igual fecha que la anterior, comunicando la sanción definitiva por su parte, de los proyectos de ley siguientes:

1.º El que suprime la comisión liquidadora de la deuda de la independencia.

2.º El que aprueba el decreto del poder ejecutivo sobre supresión de cursos en algunos colegios nacionales, y

3.º El relativo á supresiones y reducciones en el inciso 1.º del presupuesto del departamento del interior.

Se destinaron al archivo, previo, aviso de recibo.

Otra nota de igual fecha, acompañando, en revisión, un proyecto de ley, abriendo un crédito suplementario al departamento del interior, para pagar la subvención acordada á la compañía de navegación del Bermejo. (A la comisión de hacienda).

Otra, de la misma fecha, acompañando, también en revisión un proyecto de ley, por el cual se autoriza al poder ejecutivo para contratar con una compañía particular, la explotación del huano en las costas patagónicas. (A la misma comisión).

Y otra comunicando haber aceptado las modificaciones introducidas por el senado, en el proyecto de ley que suprime la comisión protectora de bibliotecas populares, alterando la redacción del artículo 2.º en la forma que

aparece del proyecto que adjuntaba. (A la comisión de legislación).

Un despacho de la comisión de peticiones, sobre diversos asuntos.

Sr. Presidente—Este despacho se imprimirá y repartirá oportunamente.

II

Sr. Presidente—Se va á dar lectura del proyecto á que se hizo referencia, por si la cámara lo quiere considerar sobre tablas.

Sr. Secretario—El artículo 2.º del proyecto sancionado por la cámara de senadores decía: « Las administraciones de correos de Belgrano y del Paso de la Patria serán servidas por las respectivas oficinas de telégrafos ».

Ha sido modificado por la cámara, en estos términos:

« La administración de correos de Belgrano será servida por la oficina de telégrafos del mismo punto ».

Sr. Bustamante—Es tan sencilla, señor presidente, la modificación, que me parece que no habría inconveniente en discutirla inmediatamente.

—Apoyada esta indicación, se votó si se consideraba ó no sobre tablas, y resultó afirmativa.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Bustamante—La razón de la modificación se explica fácilmente: consiste en que, como se hizo notar en la sesión en que se trató de este asunto, en el Paso de la Patria no hay oficina de telégrafos, sin embargo, de que el presupuesto la consignaba. Entonces dijimos: suprimamos el correo, para que se anexe á la oficina de telégrafos, cuando ella se establezca, y en el interín continuará el correo.

La cámara de diputados ha creído conveniente no aceptar esta traslación, puesto que no habiendo oficina de telégrafos en el Paso de la Patria, quedan las cosas como estaban.

Me parece que no hay inconveniente en aceptar esa modificación, para que concluya la ley.

—Votada la modificación, fué aprobada por afirmativa general.

III

—Pasóse en seguida á la orden del día, con el siguiente despacho de la comisión de hacienda:

Honorable señor:

Vuestra comisión de hacienda ha estudiado con la detención que por su importancia merece, el proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo, y sancionado por la honorable cámara de diputados en las sesiones del año anterior, aprobando las ordenanzas de aduana, reformadas por la comisión nombrada por decreto de 16 de noviembre de 1872.

Comparadas dichas ordenanzas con las vigentes, resulta que las reformas propuestas, aunque no establecen, como la misma comisión expone, grandes innovaciones, ellas favorecen los intereses del comercio, en todo cuanto es compatible con los intereses públicos, aclaran muchos puntos que han suscitado dudas y cuestiones, introduce algunas disposiciones que faltaban, y mejoran la redacción de muchos artículos de las ordenanzas actuales.

El pormenor y los fundamentos de esas reformas, los encontrará vuestra honorabilidad en el informe que dicha comisión, dando cuenta de su encargo, pasó al poder ejecutivo siendo una garantía de acierto, como aquel expresa en el mensaje con que presentó el proyecto al congreso, la ilustración y la competencia de los miembros de aquella comisión, cuyos largos servicios al país en puestos á propósito, les ha dado la experiencia necesaria en estas materias.

Vuestra comisión cree, por lo tanto, que vuestra honorabilidad debe aprobar dicho proyecto, con las tres siguientes modificaciones, por los motivos que pasa á exponer.

La primera es variar el artículo del proyecto de la honorable cámara de diputados, prescribiendo que las ordenanzas reformadas empiencen á regir desde el año próximo, lo que es indispensable, si el proyecto se sanciona en las sesiones del presente.

Las otras dos se reducen á que en vez de la tolerancia del 5 %, que el artículo 128 de dichas ordenanzas concede en la manifestación de las mercaderías, en cuanto á la clase y calidad, y de 8 % en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los que se avalúan al peso, se señale el 2 % para el primer caso, y el 6 % para el segundo; y á que se introduzca un nuevo artículo en las ordenanzas, estableciendo que la aduana haga cada mes un balance de los permisos de toda clase para la importación y la exportación, y cada cuatro meses de las guías.

Sobre el primer punto, las leyes de aduana del año anterior y del presente, fijan la tolerancia expresada en 2 y 3 %. Consultados varios funcionarios de la aduana sobre el particular, han informado á la comisión que el 2 %, en cuanto á la calidad no ha producido inconvenientes, pero sí el 3 % en cuanto al peso, perjudicando muchas veces al comerciante; por lo que la comisión, siguiendo el parecer del señor administrador de rentas, propone lo que queda expresado.

En cuanto al balance de los permisos y guías, es una consecuencia de los principios establecidos en la ley de contabilidad. Esos documentos son la base para la percepción de los derechos de aduana, y debe procederse con ellos del mismo modo que con el dinero y las letras, cerciorándose periódicamente de su existencia, y de los motivos que impidan su pronta liquidación.

En virtud de lo expuesto, vuestra comisión propone á vuestra honorabilidad el siguiente—

PROYECTO DE LEY:

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Apruébanse las ordenanzas de aduana, proyectadas por la comisión que el poder ejecutivo nombró, para la revisión de las vigentes, por decreto de 16 de noviembre de 1872, con las modificaciones siguientes:

El artículo 128, concebido en estos términos: «Si resultase diferencia en la clase, calidad ó cantidad del artículo manifestado, el vista suspenderá el despacho, y dará cuenta por escrito al administrador, de la diferencia que haya encontrado, siempre que el contenido del bulto sea de superior clase ó calidad, ó en mayor cantidad que lo manifestado, y que la diferencia exceda de un 2 % de valor en clase, calidad ó cantidad; y de un 6 % en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los que se avalúan al peso».

Agregar el siguiente artículo con el número 440 bis: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 438, la contaduría de la aduana hará un balance mensual de los permisos de toda clase, para la importación y exportación, á fin de cerciorarse de que no han sido sustraídos, ó se han extraviado, y si hay algún motivo que retarde ó impida su liquidación.

Igual balance hará la misma oficina, cada cuatro meses, de las guías que hubiese expedido la aduana, para el transporte de mercaderías de un lugar á otro de la república.

El resultado de estos balances se consignará en un libro especial, bajo la firma del jefe de la oficina, y se comunicará por escrito al administrador de rentas, para que en su caso tome las medidas necesarias, en favor de los intereses del fisco».

Art. 2.º Las nuevas ordenanzas principián á regir el 1.º de enero de 1877.

Art. 3.º Comuníquese al poder ejecutivo.

Sala de comisiones, Buenos Aires, julio 1.º de 1876.

*P. S. de Bustamante—U. Frias—
E. Colombres.*

PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Apruébanse las ordenanzas de aduana proyectadas por la comisión que el poder ejecutivo nombró para su revisión, por decreto del 16 de noviembre de 1872.

Art. 2.º Las nuevas ordenanzas principián á regir el 1.º de enero de 1876.

Art. 3.º Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la sala de sesiones de la cámara de diputados de la nación, en Buenos Aires, á 12 de agosto de 1875.

*J. BENJAMÍN DE LA VEGA.
Miguel Sorondo.
Secretario.*

PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Apruébanse las ordenanzas de aduana proyectadas por la comisión que el poder ejecutivo nombró para su revisión.

Art. 2.º Las nuevas ordenanzas principián á regir el 1.º de enero de 1875.

Art. 3.º Comuníquese al poder ejecutivo.

SANTIAGO CORTÍNEZ.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1874.

A la honorable cámara de diputados.

El poder ejecutivo tiene el honor de someter á la consideración de vuestra honorabilidad el proyecto ley adjunto, aprobando el «proyecto de ordenanzas reformadas», que le ha sido presentado por la comisión revisadora, el cual se acompaña original.

La determinación de las reformas que dicha comisión ha creído necesario introducir en las antiguas ordenanzas, la encontrará vuestra honorabilidad en su nota de remisión. Según en ella se manifiesta, todas las modificaciones proyectadas están fundadas en las necesidades que una práctica de ocho años ha venido surgiendo diariamente, ó en disposiciones análogas, contenidas en las leyes aduaneras de las naciones más aventajadas en este género de reglamentos.

Por otra parte, la reconocida competencia é ilustración en la materia, de las personas que han colaborado en este trabajo, son una garantía, á juicio del poder ejecutivo, para creer que el proyecto de ordenanzas, tal como se propone, ha de satisfacer las necesidades de nuestro comercio siempre creciente, conciliando el buen servicio con la regularidad en la percepción del impuesto.

En vista de estas consideraciones, el poder ejecutivo se permite indicar á vuestra honorabilidad la conveniencia de considerar este asunto en el presente período legislativo.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

*D. F. SARMIENTO.
SANTIAGO CORTÍNEZ.*

Buenos Aires, agosto 17 de 1874.

A S. S. E. el señor ministro de hacienda de la nación.

La comisión que por decreto fecha 16 de noviembre de 1872, se sirvió nombrar el superior gobierno para que revisara las ordenanzas de aduana, y propusiera las reformas que á su juicio debieran efectuarse en ellas, tiene el honor de dirigirse á vuestra excelencia dándole cuenta de sus trabajos, y poniendo en su conocimiento que sus tareas han quedado terminadas.

Adjunto á la presente se remite un nuevo proyecto de ordenanzas de aduana, el cual ha sido organizado en la nueva forma en que deben quedar, después de introducidas todas las reformas y variaciones efectuadas por esta comisión.

Antes de entrar al examen de las reformas practicadas es conveniente informar á vuestra excelencia, aunque ligeramente, sobre el proceder que la comisión ha observado en el desempeño de sus trabajos, así como también de los propósitos é ideas generales que la han guiado en el desempeño de su cometido.

Después de instalada y hecho el nombramiento de la persona que debía presidirla, y del cual se dió á vuestra excelencia conocimiento en oportunidad, la comisión se dirigió inmediatamente á los administradores de las aduanas del Rosario, Corrientes, Mendoza y Jujuy, que, según el decreto anteriormente citado, debían formar parte de ella como miembros ausentes, pidiéndoles se sirvieran indicar los inconvenientes que hubieran tocado en la aplicación práctica de las ordenanzas, y que indicaran al mismo tiempo las reformas que á su juicio debieran efectuarse, para salvar esos mismos inconvenientes.

Esta medida no ha correspondido á los deseos de la comisión, pues solamente se ha recibido un pliego del señor administrador de la aduana de Mendoza, en que hace algunas ligeras indicaciones.

En seguida, y después de haberse expedido sobre varios asuntos que el superior gobierno sometió á su dictamen, la comisión procedió á ocuparse de la revisión general de las ordenanzas de aduana.

Esta revisión se ha practicado, haciendo un examen prolijo de cada uno de los artículos que forman esas ordenanzas.

El resultado de este estudio ha sido adquirir el convencimiento de que, por regla general, las actuales ordenanzas satisfacen de una manera bastante cumplida á los intereses fiscales y á los del comercio del país, en sus múltiples y extensas operaciones.

En efecto, examinadas sus disposiciones con la ayuda de la luz que proporcionan los siete años de práctica, en que han regido las ordenanzas actuales; comparada la equidad de ellas con lo que al respecto estatuyen las disposiciones y sistemas aduaneros de otros países, que por sus largos años de práctica y experiencia en la materia, están á una altura más elevada que nosotros en la parte reglamentaria de sus aduanas; consultado el estado actual de nuestro país, bajo el punto de vista social y comercial, la comisión encuentra que esas ordenanzas, mejoradas hoy con las reformas propuestas, llenarán cumplidamente su objeto, y estarán al nivel de las necesidades públicas y de la marcha liberal y progresista que el país ha adoptado, á fin de llegar á su engrandecimiento y al aumento de sus rentas por el acrecentamiento y desarrollo del comercio, base fecunda de la prosperidad de todas las naciones.

Los trabajos de la comisión no pueden ofrecer grandes innovaciones, que vengán á alterar el sistema rentístico del país, porque las bases de ese sistema están consignadas en la ley de aduana, que estatuye la parte financiera de nuestras aduanas, reduciéndose la órbita de la comisión á la parte puramente reglamentaria.

Es á esta parte á la que la comisión ha dedicado todos sus esfuerzos, á fin de conciliar las facilidades que nuestro creciente comercio requiere, en todo lo que es compatible con los intereses bien entendidos de las rentas públicas.

Hechas estas breves observaciones, la comisión procede á dar cuenta á vuestra excelencia de las principales modifi-

caciones que ha creído conveniente proponer, analizándolas aunque ligeramente, y dejando á un lado todas aquellas alteraciones que revisten un carácter más secundario y que su simple enunciación daría á esta nota una extensión que ultrapasaría los límites regulares.

Las principales reformas son las siguientes:

En el artículo 5.^o que enumera las aduanas marítimas de depósito, se ha agregado la de Patagones, que fué creada por la ley del congreso nacional, posterior á la sanción de las ordenanzas.

El artículo 6.^o ha sufrido también las modificaciones siguientes: 1.^o la receptoría de San Gerónimo en la provincia de Santa Fe, ha sido suprimida, porque, según los datos obtenidos por la comisión, esa receptoría es completamente inútil, á consecuencia de las pocas operaciones comerciales que se practican por ella, y para cuya ejecución basta un simple resguardo; 2.^o se ha agregado la receptoría de Villa Colón, en la provincia de Entre Ríos, porque siendo su creación posterior á las ordenanzas, no figuraba en ellas; 3.^o se han suprimido las receptorías de Itatí, Itay-Vaté y Empedrado, en la provincia de Corrientes, por las mismas causas expresadas al tratarse de la de San Gerónimo; y 4.^o se han agregado las receptorías de Bahía Blanca, Ajó, Zárate y San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y creadas últimamente por el congreso nacional.

En el artículo 10, inciso 4.^o, se ha efectuado una modificación de importancia, que consiste en la supresión de las palabras: *perteneciente á la aduana por donde se hace la introducción*. Esta alteración importa quitar la restricción que antes tenían las aduanas, para importar artículos cargados en puntos en que sólo existen resguardo, dependientes de otras aduanas, que no son las mismas que aquellas por donde se quiere practicar la introducción. La comisión piensa que esta medida proporcionará un beneficio señalado al comercio de cabotaje, desde que ella importa ensanchar su esfera de acción.

En el artículo 11, inciso 4.^o, se ha hecho la misma reforma, respecto á las receptorías marítimas, á que se relaciona dicho artículo.

Los artículos 14, 15, 16 y 19, han sido también reformados en el sentido de los anteriores, á fin de que sean concordantes entre sí las facultades dadas á las aduanas y resguardos para la importación con las que se les asigna en las operaciones de exportación.

El artículo 20 ha sido suprimido, en vista de que en la práctica esa medida ha ofrecido no sólo dificultades, sino que no ha proporcionado ninguna garantía de seguridad, en beneficio de la renta.

El artículo 37 ha sido modificado en el sentido de que la colocación de un guarda á bordo de cada buque que entra al puerto, que por el artículo era obligatoria, ha quedado como facultativa por parte del Resguardo. Esta medida ha sido tomada á consecuencia de que no era posible cumplir esa disposición, sin que los resguardos tuvieran un personal notablemente mayor que el actual, y porque esto no es tan indispensable, que no pueda prescindirse de hacerlo, sin perjuicio para la renta.

El artículo 42 ha sido suprimido. Esta modificación importa la supresión de los derechos de visita y reglamento, llamados derechos de puertos, que son 25 centavos por

la primera y 5 centavos por la segunda. La comisión ha creído deber suprimir este impuesto, en vista de su insignificante importancia, y con el objeto de facilitar las operaciones de entrada de los buques. Piensa, además, la comisión que pequeños impuestos que no producen una renta de alguna consideración, deben ser suprimidos por regla general, á fin de no aproximarse demasiado á la teoría del impuesto múltiple.

Los artículos 109, 110, 111 y 112, han sido reformados, en el sentido de suprimir que en las manifestaciones de las mercancías se use toda clase de pesas y medidas extranjeras, quedando solamente el sistema métrico decimal, mandado ahora observar por decreto del superior gobierno nacional.

Por los artículos 114, 116 y 117 se reglamenta el procedimiento que debe seguirse, en los casos en que los introductores declaren ignorar el contenido de los bultos llegados á su consignación. Por esta reglamentación se establece que la aduana sea la que en estos casos debe inspeccionar los bultos, fijar sus contenidos y clasificar las mercancías. La comisión ha creído deber efectuar en esto un cambio, haciendo que sean los introductores quienes bajo su responsabilidad, y con intervención de la aduana, fijen esos contenidos y hagan la clasificación de sus mercancías.

Por este sistema, que es el mismo que se sigue en las aduanas francesas y otras, se evita el abuso que frecuentemente se comete, no declarando los contenidos y haciendo así recaer las responsabilidades sobre la aduana.

El plazo de cinco días, establecido por los artículos 120 y 121, para la presentación de los documentos detallados, ha sido extendido á ocho días, tanto porque la comisión ha creído que este plazo es demasiado corto, cuanto porque el gobierno le había ya dado esa extensión, por medio de una disposición dictada al efecto.

Por los artículos 140 y 141 se dispone que en las mercancías no tarifadas, los aforos sean fijados por los vistas; quedando al introductor el derecho de dejarlos á la aduana por el valor que les quiso asignar. Este procedimiento ha sido cambiado, adoptándose un sistema contrario, es decir, que sea el introductor quien fije el valor de la mercancía, teniendo la aduana el derecho de retenerlas por su cuenta, cuando crea bajo su valor, y abonando al introductor el precio fijado por él, con más un beneficio de 10 %. En esto la comisión no ha hecho más que seguir la innovación que la ley de aduana ha introducido, á lo que estaba dispuesto por las ordenanzas. Este procedimiento es también el que generalmente se sigue en las aduanas de otros países.

Los artículos 148 á 155 han sido modificados, suprimiendo el derecho que se acordaba á los introductores de mercaderías que resultaban averiadas, para poder rematarlas en sus mismas casas ó en las de los rematadores elegidos por ellos.

Por la reforma efectuada, el introductor queda con derecho á nombrar el rematador, pero el remate debe necesariamente tener lugar en los depósitos de aduana.

La comisión ha pensado que debía adoptar este temperamento, á fin de evitar los repetidos abusos que se han estado cometiendo á la sombra de esta franquicia, puesto que ella se presta fácilmente á la sustitución de unas mercancías por otras.

El plazo de cinco días que fijaba el artículo 169, para la aceptación y entrega de las letras de aduana, ha sido extendido á diez días, porque en la práctica ha resultado que aquel plazo es demasiado corto para revisar los documentos, arreglar las diferencias que suelen resultar, etcétera, etc.

El artículo 182 ha sufrido también una modificación de importancia. Este artículo ha sido causa de distintos modos de interpretación, y aunque la comisión es de opinión que su redacción es bastante clara, y que el derecho que él acuerda á la aduana es terminante, y no una mera presunción legal, como se ha interpretado, sin embargo, la comisión ha creído, para evitar interpretaciones, deber establecer en dicho artículo, de una manera expresa, que la prescripción que él encierra no admite prueba en contrario.

No se le ha ocultado á la comisión el alcance é importancia que tiene la disposición de este artículo, y es por esta razón que ha estudiado el punto con alguna detención, consultando lo que á este respecto está establecido en otros países muy adelantados en materias reglamentarias.

En Francia, porejemplo, está prohibido el derecho de reivindicación sobre mercaderías depositadas en las aduanas, cuando estas mercaderías están depositadas allí, á nombre de un deudor que ha caído en mora para el pago de los derechos.

En Bélgica, las aduanas tienen hipoteca legal sobre las mercaderías que se encuentran en el mismo caso.

Disposiciones más ó menos iguales se encuentran consignadas en las ordenanzas de aduana españolas y chilenas.

Además de las razones expuestas la comisión ha creído también que establecer lo contrario importaría en la mayor parte de los casos dejar á las aduanas sin su principal garantía por consiguiente, si hubiera visto en la necesidad de adoptar otra medida de seguridad, que traerían al comercio mismo mayores inconvenientes, que los que la medida adoptada puede traer aparejados.

El plazo de cinco días establecido en los artículos 191 y 198, para los pagos al contado, ha sido también extendido á diez días, por considerarse aquél demasiado corto.

Las bases establecidas en el artículo 331, para el cobro de almacenaje han sido arregladas al sistema métrico decimal.

Los artículos 445, 449 y 452 que fijan un término pasado el cual queda prescripta la acción de la aduana, para reclamar del comercio por errores cometidos en contra del fisco, y viceversa, han sufrido también una modificación de importancia.

Las disposiciones de esos artículos eran objeto, de dos distintas interpretaciones. Una de ellas consistía en que la prescripción sólo se refería á los errores de cálculo, cometidos en las liquidaciones de los derechos; la otra interpretación consistía en que esa prescripción se refería á toda clase de reclamo.

La comisión ha creído deber aclarar este punto estableciendo que los plazos fijados en esos artículos sólo se refieren á errores de cálculo; pero ha creído también que las reclamaciones de todo otro género, deben igualmente tener un límite fijado. El derecho común ha establecido términos más ó menos largos, pasados los cuales quedan prescriptas las acciones, por el mero hecho del transcurso del tiempo.

la primera y 5 centavos por la segunda. La comisión ha creído deber suprimir este impuesto, en vista de su insignificante importancia, y con el objeto de facilitar las operaciones de entrada de los buques. Piensa, además, la comisión que pequeños impuestos que no producen una renta de alguna consideración, deben ser suprimidos por regla general, á fin de no aproximarse demasiado á la teoría del impuesto múltiple.

Los artículos 109, 110, 111 y 112, han sido reformados, en el sentido de suprimir que en las manifestaciones de las mercancías se use toda clase de pesas y medidas extranjeras, quedando solamente el sistema métrico decimal, mandado ahora observar por decreto del superior gobierno nacional.

Por los artículos 114, 116 y 117 se reglamenta el procedimiento que debe seguirse, en los casos en que los introductores declaren ignorar el contenido de los bultos llegados á su consignación. Por esta reglamentación se establece que la aduana sea la que en estos casos debe inspeccionar los bultos, fijar sus contenidos y clasificar las mercancías. La comisión ha creído deber efectuar en esto un cambio, haciendo que sean los introductores quienes bajo su responsabilidad, y con intervención de la aduana, fijen esos contenidos y hagan la clasificación de sus mercancías.

Por este sistema, que es el mismo que se sigue en las aduanas francesas y otras, se evita el abuso que frecuentemente se comete, no declarando los contenidos y haciendo así recaer las responsabilidades sobre la aduana.

El plazo de cinco días, establecido por los artículos 120 y 121, para la presentación de los documentos detallados, ha sido extendido á ocho días, tanto porque la comisión ha creído que este plazo es demasiado corto, cuanto porque el gobierno le había ya dado esa extensión, por medio de una disposición dictada al efecto.

Por los artículos 140 y 141 se dispone que en las mercancías no tarifadas, los aforos sean fijados por los vistas; quedando al introductor el derecho de dejarlos á la aduana por el valor que les quiso asignar. Este procedimiento ha sido cambiado, adoptándose un sistema contrario, es decir, que sea el introductor quien fije el valor de la mercancía, teniendo la aduana el derecho de retenerlas por su cuenta, cuando crea bajo su valor, y abonando al introductor el precio fijado por él, con más un beneficio de 10 %. En esto la comisión no ha hecho más que seguir la innovación que la ley de aduana ha introducido, á lo que estaba dispuesto por las ordenanzas. Este procedimiento es también el que generalmente se sigue en las aduanas de otros países.

Los artículos 148 á 155 han sido modificados, suprimiendo el derecho que se acordaba á los introductores de mercaderías que resultaban averiadas, para poder rematarlas en sus mismas casas ó en las de los rematadores elegidos por ellos.

Por la reforma efectuada, el introductor queda con derecho á nombrar el rematador, pero el remate debe necesariamente tener lugar en los depósitos de aduana.

La comisión ha pensado que debía adoptar este temperamento, á fin de evitar los repetidos abusos que se han estado cometiendo á la sombra de esta franquicia, puesto que ella se presta fácilmente á la sustitución de unas mercancías por otras.

El plazo de cinco días que fijaba el artículo 169, para la aceptación y entrega de las letras de aduana, ha sido extendido á diez días, porque en la práctica ha resultado que aquel plazo es demasiado corto para revisar los documentos, arreglar las diferencias que suelen resultar, etcétera, etc.

El artículo 182 ha sufrido también una modificación de importancia. Este artículo ha sido causa de distintos modos de interpretación, y aunque la comisión es de opinión que su redacción es bastante clara, y que el derecho que él acuerda á la aduana es terminante, y no una mera presunción legal, como se ha interpretado, sin embargo, la comisión ha creído, para evitar interpretaciones, deber establecer en dicho artículo, de una manera expresa, que la prescripción que él encierra no admite prueba en contrario.

No se le ha ocultado á la comisión el alcance é importancia que tiene la disposición de este artículo, y es por esta razón que ha estudiado el punto con alguna detención, consultando lo que á este respecto está establecido en otros países muy adelantados en materias reglamentarias.

En Francia, porejemplo, está prohibido el derecho de reivindicación sobre mercaderías depositadas en las aduanas, cuando estas mercaderías están depositadas allí, á nombre de un deudor que ha caído en mora para el pago de los derechos.

En Bélgica, las aduanas tienen hipoteca legal sobre las mercaderías que se encuentran en el mismo caso.

Disposiciones más ó menos iguales se encuentran consignadas en las ordenanzas de aduana españolas y chilenas.

Además de las razones expuestas la comisión ha creído también que establecer lo contrario importaría en la mayor parte de los casos dejar á las aduanas sin su principal garantía por consiguiente, si hubiera visto en la necesidad de adoptar otra medida de seguridad, que traerían al comercio mismo mayores inconvenientes, que los que la medida adoptada puede traer aparejados.

El plazo de cinco días establecido en los artículos 191 y 198, para los pagos al contado, ha sido también extendido á diez días, por considerarse aquél demasiado corto.

Las bases establecidas en el artículo 337, para el cobro de almacenaje han sido arregladas al sistema métrico decimal.

Los artículos 445, 449 y 452 que fijan un término pasado el cual queda prescripta la acción de la aduana, para reclamar del comercio por errores cometidos en contra del fisco, y viceversa, han sufrido también una modificación de importancia.

Las disposiciones de esos artículos eran objeto, de dos distintas interpretaciones. Una de ellas consistía en que la prescripción sólo se refería á los errores de cálculo, cometidos en las liquidaciones de los derechos; la otra interpretación consistía en que esa prescripción se refería á toda clase de reclamo.

La comisión ha creído deber aclarar este punto estableciendo que los plazos fijados en esos artículos sólo se refieren á errores de cálculo; pero ha creído también que las reclamaciones de todo otro género, deben igualmente tener un límite fijado. El derecho común ha establecido términos más ó menos largos, pasados los cuales quedan prescriptas las acciones, por el mero hecho del transcurso del tiempo.

En el derecho comercial y hasta en el criminal, se encuentra también establecida la prescripción; aun para los delitos de carácter grave, en el último de éstos.

La comisión ha creído, pues, que no hay razón para que las reclamaciones que resulten de las operaciones del comercio con la aduana, no tengan también un límite fijado, y sean ellas una excepción á las razones de interés y orden público que han prevalecido universalmente para establecer la prescripción de toda clase de acciones.

Por estas consideraciones, se ha fijado el término de diez años para todos los reclamos entre la aduana y el comercio recíprocamente, siempre que estos reclamos no sean de la clase de los que tienen fijado ya un término más corto, en las mismas ordenanzas.

El artículo 466 se ha reformado, estableciendo que las patentes de navegación de los buques de cabotaje nacional sean depositadas en la capital del puerto, en vez de hacerlo en las aduanas, por considerarse que todo lo que se relaciona con las patentes de navegación, corresponde más directamente á aquella repartición.

El artículo 489 ha sido suprimido, á fin de evitar las innumerables cuestiones que se suscitaban sobre aforos en las aduanas recipientes, á consecuencia de que los valores fijados en las aduanas remitentes, resultaban disconformes ya sea por la distinta apreciación de cada aduana, ó ya sea porque los cargadores no dan á esos valores la importancia que realmente tienen por considerarlo un requisito más bien de carácter estadístico, ó ya sea por otras causas, que contribuían á la falta de exactitud en dichos aforos.

Por la modificación introducida, se evitarán esas cuestiones, puesto que cada aduana dependerá en estos casos de sí misma, sin estar sujeta á los errores ó distintas apreciaciones que hayan tenido lugar en las otras adquiriéndose por este medio una mayor facilidad para el comercio, como para las mismas aduanas, en las operaciones comerciales y sin perjuicio alguno para la renta.

El plazo de seis meses acordado por el artículo 548, para la devolución de las guías oficiales, ha sido restringido á cuatro meses, por creer que aquel plazo es demasiado extenso para operaciones que deben quedar canceladas con la brevedad necesaria.

Los artículos 567 y 568 han sido modificados en el sentido de que los efectos removidos de plaza con destino al extranjero que por la disposición actual no podían volver á tierra, una vez que hubieran sido embarcados en las lanchas que debían conducirlo á bordo del buque mayor, puedan en lo sucesivo volver á desembarcarse, sin pagar nuevos derechos de introducción, mientras esos efectos estén á bordo de las lanchas y antes de que hayan sido recibidos en el buque mayor.

Esta es otra de las facilidades que la comisión ha creído poder acordar á las operaciones comerciales, á las que la medida propuesta viene á dar una mayor libertad de acción.

Otra modificación que no carece de importancia, es la que se ha efectuado con referencia á garantizar al fisco, para que no sea defraudado en los derechos de exportación.

Hasta ahora se había considerado suficiente garantía la circunstancia de que las aduanas no despachan de sa-

lida los buques, sin que los derechos de exportación de los frutos del país que componen su cargamento, estén debidamente pagados.

Pero vuestra excelencia sabe que últimamente esta garantía ha sido burlada de dos modos distintos, en casos ocurrentes en la aduana de Buenos Aires. El primer caso ha sido por medio de alzamiento de varios buques, sin haber sido legalmente despachados. El segundo ha sido, llevando en los vapores con privilegio de paquetes, que no se despachan de salida, frutos del país que habían sido pedidos para embarcar en buques de vela.

En ambos casos las personas que aparecían como cargadores de esos frutos, y por consiguiente como deudores de esos derechos, eran insolventes ó sin responsabilidad bastante.

Esta nueva puerta abierta al fraude ha sido cerrada adoptándose la medida de exigir un fiador abonado en los permisos de exportación, y dando á las aduanas el derecho de ejecución y embargo sobre los frutos que aparecieran á bordo de los buques surtos en los puertos de la república, y que en las respectivas aduanas conste su embarque á nombre del deudor y fiador, asimilando este procedimiento á lo que está establecido para las mercaderías existentes en los depósitos de aduana.

Esta reforma se ha efectuado sobre el artículo 586, respecto al requisito del fiador, y respecto á lo demás por medio de cinco artículos agregados á continuación del 614 y que en el nuevo proyecto figuran bajo los números 596, 597, 598, 599 y 600.

El inciso séptimo del artículo 687, y los artículos 689, 690, y 691, referentes todos á los valores de las mercancías en tránsito, han sido suprimidos, á fin de concordar con la modificación introducida en el 489, de que antes se ha hablado, habiéndose explicado allí las razones en que se funda esta reforma.

Las operaciones de importación y exportación por las aduanas y receptorías terrestres, con la República de Bolivia, si bien han sufrido algunas modificaciones, ellas no han sido alteradas de una manera sustancial, porque estando aún sin realizarse la convención que debe tener lugar entre ambas repúblicas, según lo acordado en el tratado de 9 de julio de 1868, la comisión ha creído de que esa será la oportunidad de reglamentar de una manera más permanente, esta clase de operaciones, limitándose por consiguiente á modificaciones que más bien revisten un carácter provisorio.

En cuanto al tránsito de mercaderías extranjeras, que no han adeudado derechos de importación en alguna aduana de la república, con destino también á Bolivia, establecido especialmente por el artículo 11 de la ley de aduanas, actualmente vigente, la comisión ha creído deber formar el reglamento ó régimen especial que por separado tiene el honor de acompañar sometiéndolo á la aprobación de vuestra excelencia.

Las razones que se han tenido en vista para proceder así, son las siguientes, en primer lugar, que siendo esto una materia puramente reglamentaria, el poder ejecutivo puede fijar y poner en vigencia ese reglamento, sin necesidad de que esté incluido en la ley.

En segundo lugar, que esta reglamentación está también sujeta á la convención que debe celebrarse con la

República de Bolivia, según las cláusulas contenidas en el tratado anteriormente citado, y, por consiguiente, dicho reglamento reviste también un carácter provisorio.

En tercer lugar, que tratándose de operaciones que van á practicarse por primera vez, es conveniente no fijar su reglamentación en una ley de carácter permanente, como son las ordenanzas de aduana, puesto que es muy probable que la práctica de esas mismas operaciones demuestre la necesidad de variar su reglamentación, lo que sería más difícil si ella revistiera el carácter de ley.

Este temperamento adoptado por la comisión, no es nuevo, ni carece de ejemplos en que fundarse.

En casi todos los países europeos, está muy generalmente establecido el tránsito de mercaderías, que atraviesan el territorio de una ó más naciones sin que por eso esas mercaderías sufran gravámenes impuestos por las naciones cuyos territorios se atraviesan. Este tránsito se practica por medio de los ferrocarriles internacionales, y su reglamentación forma siempre un régimen especial y separado de las leyes y disposiciones aduaneras de cada una de esas naciones, siendo materia de convenciones especiales entre los gobiernos de las potencias interesadas.

Las operaciones de importación y exportación por las aduanas y receptorías terrestres, con la República de Chile, han sido igualadas á las de igual clase con las de Bolivia, en lo que se refiere á mercaderías nacionalizadas, frutos y productos del país.

Habiendo espirado el tratado celebrado en 1855 con la República de Chile, la comisión ha suprimido toda la parte de los ordenanzas que se relacionaba con el libre tránsito de mercaderías extranjeras, y del libre cambio de los productos y manufacturas de ambos países, que sólo tenían existencia en virtud del tratado cuyo término espiró.

El término de ocho días establecido por los artículos 920 y 923 para el arreglo de los registros de los vapores con privilegio de paquetes, ha sido extendido á 15 días, por considerar que aquel plazo ha resultado en la práctica ser demasiado limitado.

El artículo 1100 ha sido también modificado. Este artículo, que no importa otra cosa que fijar el límite en que concluyen las facultades de las aduanas para imponer penas, y desde cuyo límite empieza también la facultad de los tribunales ordinarios, para entender en las causas de contrabando é infracciones consumadas, ha sido materia de interpretaciones contradictorias en un ruidoso asunto seguido ante el juzgado nacional de esta ciudad.

Se ha sostenido allí que la disposición de ese artículo importa la extinción de toda acción para perseguir el delito de contrabando, cuando éste no ha sido descubierto al tiempo de practicarse, negándose por consiguiente el derecho que las aduanas tienen de perseguir los delitos de contrabandos consumados, ante los tribunales ordinarios.

La comisión ha creído que no existe ninguna razón fundada ni de conveniencia, ni de moralidad, para acordar este privilegio al delito de contrabando, sobre todos los delitos comunes, ni para admitir la teoría de que el contrabando consumado, por más probado que aparezca de los documentos de aduana, debe ser considerado en mejores condiciones que la tentativa del mismo delito.

Por estas consideraciones, el mencionado artículo ha sido reformado, consignando de un modo expreso y termi-

nante la verdadera doctrina que debe imperar en estos casos.

Los artículos penales han sido también revisados escrupulosamente, y la comisión ha encontrado pocas modificaciones que hacer en ellos.

Las alteraciones que se han efectuado á este respecto, han sido de poca consideración, y en su mayor parte tendientes más bien á minorar las penas, que la comisión ha encontrado demasiado fuertes, á fin también de hacerlas más efectivas.

Comparada la legislación penal aduanera de los principales países en que existen aduanas, con lo que á este respecto estatuyen nuestras ordenanzas, se encuentra que estas últimas son notablemente más suaves y liberales que aquéllas.

Tanto más resalta esta diferencia, cuando se considera que entre nosotros existe una mayor suma de facilidades, que sirven de incentivo al fraude y al contrabando, por la falta de aduanas, docks y depósitos adecuados, que tanto contribuyen en otras partes á la seguridad de la renta, y cuya falta deja siempre muchos flancos vulnerables, por más que ellas sean defendidas con recargos de trámites, y precauciones, que aunque necesarias, traen siempre aparejadas mayores dificultades para el comercio y para las aduanas.

A primera vista, las penas impuestas por nuestras ordenanzas parecerán siempre exageradas, no obstante lo que acaba de exponerse en los párrafos anteriores; pero debe tenerse en cuenta que esta legislación es especialísima en todos los países, y difiere notablemente su parte penal con la que se establece para los delitos comunes, en los códigos respectivos.

Para hacer palpables estas diferencias entre la legislación aduanera y la legislación criminal común, no es necesario recurrir á los perjuicios que el contrabando puede ocasionar, tanto al comercio de buena fé como á los intereses fiscales. Es más bien la existencia misma de la institución aduanera, que entre nosotros es casi la única fuente de recursos para las necesidades públicas, la que peligraría si no se establecieran esas mismas diferencias y si no se adoptaran esos mismos principios.

Para la generalidad, es difícil comprender que la tentativa de fraude ó contrabando, sea penada en igualdad de condiciones con el contrabando consumado; que el error inocente sea castigado con las mismas penas aplicadas al que se comete de mala fé; que las aduanas no son jueces de intenciones, sino que simplemente aplican la pena que corresponde á la infracción á sus reglamentos, y por el solo hecho de la infracción.

Es en estos puntos en los que resalta más la diferencia de ambas legislaciones, y ella tiene su razón de ser en la circunstancia de que en la tentativa, el error inocente no descubierto en tiempo, y la falta de mala intención, ocasionan los mismos perjuicios á la renta que los que ocasionan el contrabando consumado, el error de mala fé y la mala intención.

En materia de aduanas, la base principal para la percepción del impuesto descansa en la verdad de las declaraciones de los contenidos de los bultos; siendo, pues, este principio de carácter fundamental, sería minar por su base la institución aduanera, si se admitiera la teoría del error inocente, tanto más cuanto que él es tan difícil de distin-

guir y cuando es también tan difícil leer en las conciencias humanas.

En los títulos que se refieren á «Procedimientos para la aplicación de las penas» y «Disposiciones transitorias» la comisión no ha encontrado sino muy pequeñas modificaciones que efectuar, y estas correcciones no han sido sustanciales, limitándose á salvar algunos pequeños defectos que se han encontrado en la práctica.

Estas son, señor ministro, las reformas principales que la comisión ha encontrado conveniente proponer, después de haber dedicado todos sus esfuerzos para el mejor desempeño de su cometido.

Antes de terminar esta nota, debe también hacerse presente á vuestra excelencia la conveniencia que habría en someter estas reformas á la aprobación del congreso nacional en el actual período legislativo á fin de que ellas, si fueren aprobadas, empezaran á regir desde el 1.º de enero del año próximo.

Al dar por terminadas sus tareas, la comisión espera que sus trabajos merecerán la aprobación del superior gobierno.

Dios guarde á vuestra excelencia.

*Cristobal Aguirre. — Francisco Pico. —
Juan M. Perdríel. — C. del Campo.*

Septiembre 4 de 1874.

Acútese recibo, dándose las gracias á la comisión, por la contracción con que ha llevado á cabo el importante trabajo que el gobierno encomendó á su reconocida ilustración y competencia.

Remítase al honorable congreso, con el proyecto acordado.

SARMIENTO.

SANTIAGO CORTÍNEZ.

Sr. Frías (U.)—La orden del día, señor presidente, que se ha repartido á los señores senadores, contiene todos los documentos concernientes á este asunto, á saber: el proyecto y el mensaje del poder ejecutivo, el informe detallado de la comisión nombrada por el mismo, proponiendo las reformas que cree convenientes en las ordenanzas en vigencia, y el informe de la comisión de hacienda de esta cámara, dando las razones por las cuales, á su juicio, deben aceptarse por vuestra honorabilidad, como ya lo ha hecho la honorable cámara de diputados, con sólo la adición de un artículo, el relativo al balance de permisos y de guías.

Creo que esas razones, que ya conoce la honorable cámara por los informes referidos, son bastantes para inclinar su ánimo á prestar su sanción al proyecto que se considera, como la comisión lo aconseja.

Agregaré, sin embargo, que consultado el administrador de esta aduana, cuya competencia en estas materias es muy conocida, sobre el artículo adicional que

propone la comisión de hacienda, le ha manifestado que lo cree conveniente.

Yo también puedo asegurar á la honorable cámara, fundado en mi propia experiencia, la utilidad de esa medida, sobre todo para las aduanas cuyo movimiento es de alguna consideración.

Siendo administrador de la del Rosario, la puse en práctica, con mucha ventaja para los intereses públicos.

Aquí debiera concluir, tratándose del asunto en general; pero habiendo algunos señores senadores manifestado á la comisión, dudas sobre la conveniencia de aceptar ó adoptar dos de las reformas que se proponen agregaré algunas palabras más.

Las ordenanzas de aduana vigentes, prescriben, que se consideren del deudor ó del fiador por derechos de aduana, todas las mercaderías que tuvieran en ella á su nombre, por consignación ó por transferencia. La reforma que se propone es, que no se admita prueba en contrario de esta presunción, cualquiera que haya sido la época en que se haya hecho la introducción de las mercaderías á la aduana.

La comisión cree justo, conveniente, y aún indispensable, que se establezca esta prescripción, porque, aunque es clara la disposición vigente sobre la materia, ella ha dado lugar á diversas interpretaciones.

En efecto, señor presidente, la aduana en sus relaciones con el comercio ó con los particulares, no tiene que hacer sino con aquellos que le presentan las mercaderías á despacho; con ellos solamente contrata, y de consiguiente, ellos son los únicos responsables de las obligaciones que con ella contraen ó con el fisco.

La corte suprema de los Estados Unidos, en muchos casos, ha decidido este asunto en ese sentido.

Este es también el principio establecido en el curso ordinario del comercio, según el cual el consignatario queda obligado directamente con las personas con quienes trata, sin que éstas tengan acción contra el comitente, ni éstas contra aquéllas.

De otra manera, (fácil es comprenderlo), el comercio sería muy difícil de hacerse, sobre todo, en su actual estado en el mundo, y lo mismo sucedería con el despacho de la aduana. Tendría ésta, ó que entenderse con los verdaderos propietarios ó dueños de las mercaderías, y no con el consignatario,—lo que es imposible, ó que cobrar los derechos al contado, lo cual sería muy oneroso para el comercio, y, por consiguiente, para el país.

Es, pues, indispensable, establecer esta disposición, que se apoya en motivos

iguales ó de mayor peso, tal vez, que otras disposiciones análogas ó iguales á las leyes, como, por ejemplo, sin salir de la materia de consignación, esta que contiene el código de comercio, á saber: que el consignatario en las ventas á plazos, si no da aviso á su comitente del nombre y domicilio de los compradores y del plazo estipulado, se reputan ventas al contado, sin admitirse pruebas en contrario. ¿Por qué? porque de otro modo, el consignatario podría, con la mayor facilidad defraudar á su comitente; ó como esta otra, que tiene bastante analogía con el privilegio ó preferencia, que el artículo de que se trata concede al fisco: que el mandatario tiene derecho á retener de los objetos de la operación de que ha sido encargado, todo lo que baste para pagarse de lo que se le debe por el mandato.

Pero se dice, señor presidente, que esta disposición tiene un alcance mayor, porque da al fisco el privilegio de pagarse deudas anteriores, con mercaderías que no pertenecen quizá al consignatario.

Así es la verdad; hay casos en que eso puede suceder; pero es justo y necesario que así se establezca. Este privilegio se funda en los principios de derecho, que ya he expuesto,—en la necesidad de asegurar la renta del tesoro público, sin la cual la nación no puede existir, y aún en razones de conveniencia para el mismo comercio: él se halla establecido, entre otras, en naciones tan adelantadas como la Francia y los Estados Unidos, y nuestros mismos códigos dan preferencia á los créditos fiscales y municipales, procedentes de impuestos.

Es bien sabido, además, que los privilegios que las leyes acuerdan á ciertos créditos, es por su calidad ó naturaleza, que hace con mucha justicia que se prefieran á otros, aunque sean anteriores; y si esto se hace respecto de créditos particulares, ¿por qué no se ha de hacer lo mismo, mediando las mismas ó mayores razones, con los créditos de la nación?

La otra reforma á la que se hace oposición, señor presidente, es la que tiene por objeto, que la aduana pueda recurrir á los tribunales de justicia, cuando al tiempo del despacho han pasado inapercibidas las infracciones á sus reglamentos y las mercaderías han salido de su jurisdicción.

Esta disposición no es más que una aclaración de las ordenanzas vigentes, que prescriben que la aduana no puede imponer penas por infracciones á sus reglamentos, en los casos expresados; pero de aquí no se deduce que no tenga el derecho de

perseguir ante los tribunales á los que, empleados ó particulares, ó unos y otros, cometiendo un grave delito, defraudan al tesoro público, sólo porque ha sido engañada, y las mercaderías han salido de sus depósitos.

Las leyes sobre delitos sujetos á la jurisdicción nacional, prevén y castigan los crímenes que se cometen contra el erario, ya por funcionarios públicos, ya por particulares, por supuesto, previo el correspondiente juicio; y la ley de contabilidad dispone también, que cuando en el examen de las cuentas se descubra alguno de esos crímenes ó delitos, la contaduría general lo participe al poder ejecutivo, para que éste incite á quien corresponda, á fin de que los autores y cómplices sean castigados ó juzgados por la autoridad competente. El principio, pues, está establecido en nuestras leyes, y, con la reforma que se propone, no se hace otra cosa que aclarar una disposición vigente, como ya he dicho antes.

Por otra parte, ¿quién ignora que puede hacerse el contrabando, cometiendo el delito de falsedad, de hurto, de cohecho, y todavía otros mayores? Y sería justo que se juzgase y castigase á los autores y cómplices de estos delitos, y quedase impune el de defraudación del tesoro público, que no sólo es conexo, sino inseparables de aquellos otros? Evidentemente no, señor presidente.

Yo créo que las pocas palabras que acabo de decir, y las demás consideraciones expuestas en los informes referidos, justifican suficientemente el dictamen de la comisión en este asunto.

Sr. Bazán—Desearía saber, señor presidente, en qué orden van á entrar á discutirse los artículos de este proyecto.

Sr. Presidente—Según la exposición que acaba de hacer el señor senador, en la última parte de su discurso, me parece que correspondería á la discusión en particular.

Sr. Bazán—Así me ha parecido.

Sr. Presidente—Podemos votar en general el despacho, y después, en la discusión particular si hubiera oposición, establecer las modificaciones que los señores senadores tengan á bien hacer á los artículos de las ordenanzas de aduana, cuya adopción propone la comisión.

Sr. Bazán—Efectivamente, era lo que iba á proponer, porque deseo tomar la palabra para impugnar una de las modificaciones que se han hecho á los artículos que tiene la ordenanza de aduana, y sobre cuya modificación acaba de hablar

el señor miembro informante de la comisión. Cuando llegue esa oportunidad, manifestaré las razones que tengo para oponerme á la adopción de este artículo, en los términos que se propone.

Es lo que quería decir por ahora.

Sr. Presidente—Se va á votar en general el despacho de la comisión, si no hay quien haga uso de la palabra.

—No habiéndose usado de la palabra, se votó el despacho, y fué aprobado por afirmativa general.

Sr. Bazán—Generalmente, por el reglamento, todos los proyectos cuya sanción aconsejan las comisiones, se leen y ponen á discusión, y á votación también, cuando la discusión se ha agotado; pero aquí, como se trata de un código, que consta nada menos que de mil y tantos artículos, es algo embarazoso sin duda, seguir ese sistema que el reglamento fija para la sanción de las leyes. Para simplificar el procedimiento, propondría que se pusiera á discusión ese artículo que lleva el número 128, en que la comisión propone una reforma, y si no hay quien haga uso de la palabra, entonces se vota, y así se seguirá con los demás, hasta llegar al artículo número 182, que es al que tengo que observar.

Sr. Presidente—Así entiendo que debe procederse. Lo que está en discusión ahora, es la reforma que introduce la comisión en el artículo 128 de las ordenanzas de aduana.

Sr. Bustamante—Las ordenanzas vigentes, disponen la tolerancia de los artículos de peso, de un 8 % y los de calidad, de un 5 %. La reducción de los artículos es la misma en uno y otro; pero la diferencia consiste en eso: la tolerancia en lugar de 5 %, en los artículos de calidad, trae al 2 % y en los de peso al 5 %.

Sr. Presidente—Se va á votar, si se acepta la reforma introducida al artículo 128 de las ordenanzas de aduana.

—Votada, resultó afirmativa general.

Sr. Bazán—Si no hay algún señor senador que observe alguno de los artículos siguientes, hasta el que lleva el número 182, en las ordenanzas vigentes, pediría la palabra.

Sr. Presidente—Viene en seguida el artículo 440. Puede hacer uso de la palabra el señor senador.

Sr. Bazán—Antes, desearía conocer

la redacción con que ha quedado definitivamente propuesto este artículo.

—Se leyó.

Art. 171. « Se entenderá ser del deudor, « ó del fiador, todas las mercaderías que « estuviesen en la Aduana, á nombre de « ellos, por consignación ó por transferencia, cualquiera que sea la época en que « hayan entrado, y sin admitir prueba en « contrario».

Sr. Bazán—Las explicaciones que he oído al señor miembro informante, desgraciadamente no me satisfacen, señor presidente, y me voy á oponer á la reforma que acaba de leerse, porque la creo injusta. Luego de demostrar esto, propondré otra reforma en sustitución de esa, que, á mi juicio, consulta los principios de equidad y justicia, mucho más que la que nos ofrece la comisión.

El artículo, señor presidente, tal como está redactado en las ordenanzas de aduana, ha dado origen, según se ve de lo expuesto por el señor miembro informante, á distintas interpretaciones; una de ellas es que, cuando dice este artículo que debe entenderse ser del deudor ó fiador las mercaderías que estuviesen en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó transferencia, se entiende solamente que establece una presunción que puede destruirse con una prueba en contrario; y la otra es la que el señor senador, miembro informante, le ha dado, consignándola como adición al artículo. Es decir, que los términos de este artículo, no dejan duda alguna de que debe entenderse á la letra, sin admitirse prueba en contrario. O lo que es lo mismo, que una mercadería introducida en la aduana á nombre de un consignatorio, debe siempre reputarse de su propiedad.

Esta, señor, ha sido también la doctrina sostenida siempre por la aduana. Más de una vez, en virtud de ella, ha embargado las mercaderías que estaban allí por consignación ó transferencia, procediendo á rematarlas y pagar con su precio las deudas anteriores vencidas, que tuviesen el introducido ó fiador, sin que admitiese en manera alguna, reclamo de los propietarios de esas mercaderías, que quisiesen demostrar hasta la evidencia, cómo esas mercaderías que se hallaban á nombre de los deudores, no eran efectivamente de ellos.

Felizmente, señor presidente, se presentó un caso, en que esta doctrina injusta y atentatoria á todos los principios del derecho, fuese desautorizada y condenada por el fallo de uno de los tribunales más nota-

ble de nuestro país: la suprema corte de justicia, quien estableció en su fallo, todo lo contrario de lo que ahora nos propone la comisión.

Pero antes y para demostrar la injusticia que hay en esta reforma, vá á permitírseme exponer el caso que motivó esa resolución.

Don Manuel Ocampo, de este comercio, compró aquí, en la plaza de Buenos Aires, mercaderías que estaban en los depósitos fiscales de la aduana, para remitirlas á Santiago del Estero, á los señores Taboada; presentó sus permisos, y las mercaderías fueron despachadas, consignándolas á don Carlos M. Palacios, en el Rosario, para que las recibiese allí pagando los derechos que ellas adeudasen, y las remitiese á Santiago del Estero. Don Carlos María Palacios debía en ese tiempo, á la aduana del Rosario, algunos créditos por letras vencidas que no había podido pagar; y al presentarse á solicitar el despacho de las mercaderías que habían llegado á esa aduana, ésta se las embargó, le intimó el pago de las letras vencidas que tenía, y como el señor Palacios no las pagase, la aduana procedió entonces á rematar esas mercaderías, para pagar con su precio todo lo que le debía el señor Palacios, por créditos vencidos. El señor Ocampo no pudo evitar este procedimiento, así que tuvo conocimiento de él, por más que reclamó, diciendo que eran suyas esas mercaderías y que no era justo ni razonable, que se pagasen las deudas del señor Palacios, de quien no era garante, con mercaderías de su propiedad, con mercaderías que él había comprado aquí y que las remitía para un comerciante del interior, pero nada se le atendió, y como he dicho, esas mercaderías se remataron, y, con su producido, se pagaron las deudas del señor Palacios.

El señor Ocampo, entonces, obteniendo del gobierno el permiso para demandarla, se presentó ante el juez federal del Rosario, reclamando el precio de sus mercaderías; pero éste no hizo lugar á su reclamo y sentenció de acuerdo con las teorías que sostenía la aduana: que el embargo y remate estaban bien hechos, y que ésta había procedido en la esfera de sus facultades, pagándose las deudas del señor Palacios, con el producido de las mercaderías rematadas. El señor Ocampo apeló á la suprema corte, y aquí la suprema corte de justicia revocó, señor presidente, el fallo del juez federal de Santa Fe, disponiendo en su parte resolutive: que si el señor don Manuel Ocampo probaba que aquellas mercaderías que se le habían embargado

y rematado, eran de su propiedad, el fisco le devolviese su precio, deducidos los derechos de aduana que había de pagar á su introducción.

He aquí, señor presidente, establecida, por la resolución de uno de los tribunales más respetables de nuestro país, la verdadera y justa inteligencia que debía tener y tiene el artículo de las ordenanzas que discutimos; es decir, que aquellas mercaderías que estén á nombre del consignatario, (como lo era en este caso el señor Palacios, de las que la aduana había rematado de don Manuel Ocampo), no hagan frente con su importe á los créditos vencidos que tuviese dicho consignatario, siempre que se pruebe que no son de su propiedad.

Pero hay algo más, que debe notarse en esta resolución de la corte, y es que en ella se establece la justísima doctrina, ó principio, mejor dicho, de que: «las deudas « de los unos no pueden jamás pagarse « con los intereses de los otros, siempre « que éstos demuestren satisfactoriamente, « que son suyos esos bienes, sobre los cua- « les quiere echarse el acreedor.»

Y para que se vea, señor presidente, que esto es lo que la corte realmente resolvió, voy á leer uno de los considerandos de esa sentencia, que es bastante extensa, y que no la leo toda, por no fatigar la atención del senado.

Dice así:—«Que la doctrina establecida « en los presentes considerandos, no pue- « de hacer incierta de manera alguna, la « persona de los deudores á la aduana, « pues para la aduana los deudores que- « dan siempre ciertos y nominativamente « conocidos en la persona de los introduc- « tores ó exportadores, y en la de sus fia- « dores, que son los que se han obligado « para con ella; no importando esa doctri- « na otra cosa, que *la declaración de que « la deuda de unos no pueda hacerse « efectiva sobre los bienes de otros, siem- « pre que éstos justifiquen satisfactoria- « mente su propiedad*, poniéndolos á cu- « bierto de una presunción, que sólo po- « dría comprenderlos por una interpretación extensiva, y que ellos destruyen por una prueba en contrario.»

Se vé, pues, señor presidente, cómo la corte ha venido á establecer, como antes he dicho, la justa y genuina interpretación que debe tener este artículo de la ordenanza, y que la declaración que acabo de leer, se recomienda por su profunda verdad y sensatez, á la simple lectura.

En efecto: no se comprende cómo lo que debe un individuo, deban pagarlo los inte-

reses de otro, ni me puedo explicar, cómo ha podido escaparse esta verdad de sentido común, diré así, á la ilustrada competencia de los señores de la comisión, cuando ellos vienen precisamente á proponernos todo lo contrario á esto, es decir, que debe entenderse siempre, ser de la propiedad de los consignatarios aquellas mercaderías que estén á su nombre, por más que se pruebe evidentemente que no son de ellos. De manera, que los señores miembros de la comisión aceptan que es lícito y justo pagar lo que debe una persona, con los intereses de otra muy distinta, que no es ni garante de esas obligaciones, ni tiene razón alguna de derecho con ellas, para venir á obligar lo que es de su propiedad, á una deuda antigua, anterior, del otro individuo.

Esto, señor presidente, como se comprende, no puede apoyarse en principio alguno de razón ni de equidad, y es abiertamente contrario á todos los principios de la legislación vigente, tanto del código civil, como del código comercial que nos rige, y no hay, por consiguiente, razón para que vengamos á introducir esta novedad.

En el código de comercio, y lo mismo por la legislación del código civil, se dispone, que siempre que haya un deudor insolvente que no pueda hacer frente á las obligaciones que ha contraído, se proceda á su ejecución y á formársele su concurso, si hay varios acreedores de él, autorizando las leyes de ambos códigos, á que el propietario de ciertos bienes que se encuentran en poder del deudor, sea atendido con preferencia á cualquiera otro acreedor, por privilegiado que fuera, siempre que establezca la excepción que se llama de dominio.

Así vemos que en el código de comercio, al establecerse las distintas clases de privilegios, se enumera en primera línea al acreedor de dominio, es decir, aquel á quien pertenecen efectivamente en dominio las cosas que tiene el deudor fallido, y después siguen los acreedores con privilegio general, los acreedores con privilegio especial, los acreedores hipotecarios y los simples quirografarios ó comunes.

No hay, pues, razón alguna, señor presidente, que pueda convencer de la justicia que haya, en hacer que el fisco deba ser pagado con preferencia, de deudas que tenga á su favor el consignatario, con mercaderías que pertenecen en propiedad á un tercero.

Y la razón que hay, aparte de las que he indicado, señor presidente, se comprende fácilmente, si se tiene en consideración que

las conveniencias del fisco, cualquiera que sean, nunca pueden autorizarnos á violar los sagrados principios de la justicia y del derecho; y así digo, que si se acepta esa modificación que propone la comisión, hará una escandalosa violación de principios, porque vendremos á autorizar y á legalizar la usurpación y el robo, porque hay usurpación y robo, en eso de venir á arrebatar las propiedades de un tercero, para pagar el fisco los créditos que tenga contra un otro deudor, cuando ese tercero no es ni garante, ni tiene relación ninguna de derecho con el que le debe. Hay algo más, señor presidente; no sólo vienen á derogarse otros artículos del código, con esta disposición que nos aconseja la comisión, sino á hacerse un título de defraudación en favor del fisco, de actos lícitos, de actos permitidos por el código de comercio vigente, porque es acto lícito y operación permitida, la de que un comerciante pueda remitir sus mercaderías á un comisionista, para que éste, ó se las venda, ó les dé el destino que aquél le haya indicado.

¿Y qué resultaría, si nosotros aceptásemos ese principio, de que las mercaderías del comitente han de responder precisamente á las deudas que tenga el comisionista? Que habríamos introducido la alarma y la inseguridad en el comercio, á más de la defraudación y la ruina de comerciantes inocentes, que no han podido saber si aquella persona á quien comisionaron para que hiciera una operación lícita, debía ó no al fisco.

No hay, señor presidente, razón ninguna que pueda autorizar, repito, esta reforma que nos propone la comisión.

Las leyes deben proponerse fines honestos, fines honrados; las leyes no deben jamás rodear de dificultades al comercio de buena fe, suscitándole peligros artificiales, porque esto vendría á afectar profundamente la riqueza pública y la misma renta. Así lo expresa, señor presidente, la corte, en otro de los luminosos considerandos de la sentencia á que me he referido, y que dice:

« La ley procede siempre con propósitos honestos. No puede tener jamás la intención de fomentar el engaño, de favorecer la negligencia, de tender redes á la buena fe del comercio, de rodearlo de dificultades y peligros artificiales, que lo detengan en sus evoluciones, lo desalienten, lo aminoren, y con el peligro, desaliento y la aminoración del comercio, produzcan la decadencia de la riqueza pública y la decadencia de la renta misma.»

« La ley no considera como bienes, los « que traen más daño que provecho: reg. « 3, título 34, part. 7; y no ha podido an- « teponer la pequeña ventaja de una fisca- « lidad injusta y excesiva, al respeto que « se debe al proceder de buena fe.»

Todas estas consideraciones, señor presidente, resplandecen de justicia, de equidad y de verdad, y, sin embargo, vienen á echarse al suelo con la reforma que propone la comisión en el artículo que discutimos.

No es cierto, señor presidente, que hubiese de defraudarse el tesoro, porque no aceptemos este monstruoso privilegio que se quiere dar al fisco; no es cierto tampoco que en los Estados Unidos se haya adoptado esta doctrina, que nos ha dicho el señor miembro informante de la comisión, era allí recibida; no, nada de todo esto, señor presidente: en los Estados Unidos, las mercaderías que están en la aduana, nunca responden á los derechos adeudados por otras mercaderías despachadas anteriormente.

Sr. Frías (U.) — Responden á toda clase de deudas.

Sr. Bazán—No es cierto, y voy precisamente á demostrarlo, con la autoridad de la corte suprema de la República Argentina, en uno de cuyos fallos, que tengo en mi mano, se leen estas palabras, sobre las cuales pido muy especialmente la atención de los señores senadores.

« La suprema corte de los Estados Unidos declaró en el caso de Harris V. Den- « nié, por el órgano de Story, (y de Story « nada menos, señor), que pronunció la « sentencia en nombre de la corte, que los « *Estados Unidos no tienen privilegio « alguno sobre las mercaderías anterior- « mente importadas*, á pesar de que, allí, « como entre nosotros por la ordenanza « de aduana, se reputa, por la ley, para los « efectos del impuesto, como propietarios « de las mercaderías, *á las personas á « quienes dichas mercaderías hayan si- « do consignadas*»; (véase, pues, cuán terminantes son las decisiones de la corte de los Estados Unidos), « y se manda, tam- « bién, como en la ordenanza nuestra, que « á ningún deudor que haya dejado de « cumplir las obligaciones del impuesto, « *le sea hecho crédito en lo futuro, por « derechos en las aduanas de los Esta- « dos Unidos, mientras tales obligacio- « nes no sean pagadas y canceladas*. « —Curtis, Reports, título 8, página 425.»

Señor presidente: estas autoridades, es decir, la de la corte de la República Argentina y la de los Estados Unidos, expo-

niendo estas doctrinas por uno de sus más eminentes jurisconsultos, Story, vienen pues, á condenar clara y terminantemente, esto que nos propone la comisión, es decir, que aquellas mercaderías que se hallen en la aduana á nombre de los consignatarios, han de responder precisamente á las deudas que tenga dicho consignatario. No es cierto: esas mercaderías sólo pueden responder y responden á lo que dice el código de comercio, que es lo siguiente:

En el capítulo segundo, de las comisiones y consignaciones, artículo 384:

« Los efectos consignados, se entienden « especialmente aplicados al pago de las « anticipaciones que se hubiesen hecho « por ellos.»

Por esto, señor, cuando vienen efectos de Europa, consignados á esta plaza de Buenos Aires, generalmente, los comerciantes que han pedido estos efectos para venderlos por cuenta de los remitentes de Europa, han adelantado ya hasta las dos terceras partes del importe de la factura que les remiten, y es justo, por consiguiente, que estas mercaderías que llegan aquí, paguen esta deuda. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones con que vienen estos artículos.

Bien, pues, decía:

« Los efectos, consignados, se entien- « den especialmente aplicados á pagar las « anticipaciones que se hubieren hecho, « gastos de transporte, conservación y de- « más *legítimos*», como son los derechos de aduana que hayan de cobrarse por la introducción en este mercado, así como las comisiones é intereses respectivos, porque el comerciante que recibe mercaderías de Europa, no va á hacer el negocio sin percibir la comisión que es de estilo en la plaza, ó la que se haya estipulado.

Véase, pues, señor presidente, que no es cierto que las mercaderías que están en la aduana, hayan de responder á deudas anteriores de los consignatarios.

Yo comprendo, señor presidente, que tratándose de las prendas que se dan, para asegurar el crédito contraído sobre ciertos y determinados objetos, responden, no á las deudas anteriores que tenía el deudor, no señor, sino á las deudas que se contraen con ocasión de esos objetos, que van á poder del acreedor, respondiendo al dinero que se haya anticipado por la prenda que se le ha dado, porque otra cosa sería venir á favorecer el fraude y la mala fe. Es como si yo, por ejemplo, presentándoseme un objeto que vale como cien y pidiese como cincuenta, recibiese en garantía ese objeto y después saliese otro

diciéndome: no, eso es mío, devuélvame, sin que tenga que pagarle aquello que ha venido asegurándole esa prenda.

Así digo, respecto de los derechos de aduana. Es justo, señor presidente, que los derechos que devengan estas mercaderías que se introducen, los paguen ellas, y si la aduana, por favorecer las operaciones del comercio, no exige inmediatamente el pago de ellas, para eso tiene una de las seguridades que la ley ha encontrado suficientes, y es que el importador, el consignatario, ó quien quiera que sea, firme una letra, la cual debe estar asegurada con un fiador abonado. Si al vencimiento del plazo de esta letra, ella no fuera pagada, no por esto queará el fisco del todo defraudado; entonces le queda el recurso que tiene todo acreedor, cuando el deudor no le paga, á saber: ir á ejecutar á aquel que está inmediatamente obligado, y en esa ejecución, ó en el concurso que se le forme, usará de los privilegios fiscales, que no se puede decir que son cosa que nada vale; valen muchísimo, porque ellos vienen á establecer la preferencia en el pago de los derechos fiscales, sobre todos los demás acreedores, á excepción de aquellos, se entiende, que demuestran el dominio que tienen en las cosas que se hallan en poder del deudor.

El principio, señor, que se ha recordado, sobre que las cosas que entran á una finca alquilada, responden de los alquileres de ella, no es tampoco tan absoluto. Si el inquilino que entra allí le dice al propietario de la casa: señor, estas cosas que introduzco aquí, no son mías, no por eso responden ellas á los alquileres, y en ningún caso á deudas de otro género á su favor, sepa ó no que pertenecen al inquilino.

Se ve, pues, señor presidente, que con la reforma que se propone, vamos á echar por tierra todos los principios de justicia y de equidad, cosa que francamente no creo que el senado, procediendo con la ilustración y con la rectitud que siempre observa, cuando se trata de cuestiones que afectan tan profundamente los intereses públicos, haya de aceptar. En su lugar, señor presidente, y para conciliar los principios que antes he expuesto, propongo esta otra modificación, si fuera desechada la de la comisión: « Se entenderá ser del « deudor ó del fiador, todas las mercaderías que estuviesen en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó por « transferencia, salvo, sin embargo, los derechos de tercero para justificar su propiedad y evitar todo perjuicio.»

Así es como creo, señor presidente, que se consulta la justicia y los sanos principios; y no se quiera decir por esto, que sea inútil dejar consignado aquí el artículo, tal como lo propongo, porque con ese artículo se habrá establecido la presunción de que, aquellos efectos que están á nombre del que, como consignatario, va á reclamarlos al despacho, son de él mientras no se pruebe lo contrario, y la aduana no debe permitírseles sacar, cuando él no haya hecho honor á las obligaciones que tenga, hasta ver que se esclarezca la cuestión ante los tribunales, á donde debe mandar las letras que no haya pagado el introductor ó el fiador, para que se haga la ejecución ó forme el concurso necesario, hasta ser el fisco satisfecho de su crédito.

Sr. Presidente—¿El señor senador propone ese artículo?

Sr. Bazán—Sí, señor; propongo este artículo en sustitución del de la comisión, si fuese rechazado.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Este artículo, estando apoyado, se tendrá presente para el caso en que no fuera aceptado el propuesto por la comisión, que es el artículo 182 de la ordenanza vigente, y 171 de la reformada.

Sr. Frías (U.)—Pocas palabras diré, señor presidente, para contestar al señor senador por La Rioja; me parece que él raciocina bajo un falso supuesto.

El dice, que la reforma que se propone, tiene por objeto hacer que el fisco se pague de sus deudas, con bienes que no pertenecen á aquel que es deudor de él. Pero, señor presidente, según el mismo señor senador lo ha establecido, leyendo la sentencia de la corte, el consignatario se considera y debe considerarse dueño de las mercaderías que se importan á la aduana. Así también es en los negocios comerciales. El comisionista, ó consignatario, se obliga con las personas con que contrata, sin que esas personas tengan acción contra el comitente, ni el comitente contra ellas.

Voy á tomarme la libertad de leer el artículo del código de comercio que así lo establece. Es el artículo 337, dice: «El « comisionista queda directamente obligado « hacia las personas con quienes contrata, « tase, sin que éstas tengan acción contra « el comitente, ni éste contra aquéllas, á « no ser que el comisionista hiciera cesión « de sus derechos á favor de una de las « partes».

Esto es lo que sucede en la aduana, señor presidente, sin que haya violación de

la constitución, sin que haya usurpación de derechos ó de bienes de nadie.

Un comisionista que recibe sus mercaderías aquí, por ejemplo, y que las vende para cualquiera de los mercados del interior, se entiende con los respectivos compradores, y éstos no tienen acción contra los dueños verdaderos de aquéllas, que las han remitido tal vez de Europa, quienes se entienden únicamente con el consignatario.

Esto es lo mismo, repito, que lo que sucede cuando se introduce un cargamento á la aduana.

El consignatario lo recibe y lo deposita en ella, y si es que se aceptara la modificación propuesta por el señor senador, vendría á resultar que ese consignatario, después de haber introducido á plaza una parte de ese cargamento y haber firmado letras por los derechos, no pudiendo ó no queriendo pagarlos al vencimiento del plazo, podría defraudarlos fácilmente, sin embargo de que ese mismo consignatario tiene parte de las mercaderías en los almacenes de aduana, sin que ésta pudiese cobrar los derechos que se le adeudaban. ¿Por qué? Porque nada sería más fácil que producir pruebas, para acreditar que las mercaderías que están en la aduana, no pertenecen al consignatario, sino á cualquier otra persona.

Ahora digo, esto sería justo, señor presidente. ¿Hay alguna violación de los principios ó de la constitución, en que la aduana se pague lo que se le debe, con los bienes de un deudor que están en su poder?

Antes manifesté los motivos por los cuales las leyes conceden privilegios, á ciertos créditos; á estar á la doctrina que ha expuesto el señor senador por La Rioja, vendría á resultar que nunca es conveniente concederlos, porque, dice, sería una injusticia. Precisamente la justicia está en hacer esa preferencia, pues de otro modo resultaría una desigualdad chocante. La preferencia que se da á un crédito, es por su calidad no por su fecha.

Antes hablé de algunas presunciones que establecían las leyes; por ejemplo, la relativa á los mismos consignatarios, por la que en las ventas á plazo, si no se avisa á los comitentes el nombre y domicilio de los compradores y los plazos estipulados, se reputan al contado, sin admitirse absolutamente prueba en contrario, porque de otra manera, el comitente podría ser fácilmente perjudicado por el consignatario.

Hay otras muchas presunciones, como es sabido, establecidas por las leyes, precisamente á fin de evitar perjuicios, fraudes

ó injusticias, que de otro modo se harían con facilidad.

El señor senador por La Rioja ha hecho la historia del asunto del señor Ocampo, con la aduana del Rosario, que tomó al señor Palacios las mercaderías que envió el señor Ocampo para ser remitidas á Santiago; pero en ella se ha olvidado de una circunstancia gravísima é importante.

Sr. Bazán—Que no es pertinente.

Sr. Frías (U.)—Es muy pertinente: ahora lo va á ver el señor senador.

Una de las razones principales que la corte tuvo para haber fallado como falló, es que cuando se remitieron esas mercaderías al Rosario, el señor Palacios estaba, puede decirse, quebrado. La aduana no le cobró conforme á las leyes, en el término que señalan, las letras vencidas que tenía, por derechos de mercaderías introducidas anteriormente. Por eso es que la corte suprema dice en uno de sus considerandos: la aduana no puede prevalerse de su misma culpa ú omisión, para perjudicar á un tercero: si no hubiera sido esta circunstancia, es muy probable que la sentencia habría sido en sentido contrario.

Sr. Bazán—Eso nada tiene que ver con la cuestión, son otras razones.

Sr. Frías (U.)—Es una de las principales que la corte tuvo en vista, y á fe que con mucha justicia. La aduana dejó de cumplir con su deber, no cobrando al señor Palacios los créditos que tenía á su favor. Por esto es que la corte dice muy bien, la aduana prevaleándose de una falta suya, no puede perjudicar á un tercero.

El señor senador ha negado que en los Estados Unidos éstos tengan preferencia, sobre todas las deudas, para el pago de las suyas por derechos ó por otra causa, en mercaderías que se introdujesen, después en la aduana.

Sr. Bazán—No he dicho eso.

Sr. Frías (U.)—Me voy á permitir leer, como lo ha hecho el señor senador, lo siguiente: «Cuando un empleado en la « administración de rentas, ó persona que « debe á los Estados Unidos, llega á ser « insolvente, ó cuando los bienes de un « deudor muerto, son insuficientes para « pagar todas las deudas, la deuda á los « Estados Unidos se pagará primero. Esta « prioridad se extiende, tanto á casos en « que el deudor, no teniendo suficientes « bienes para pagar todas sus deudas, ha « ya hecho una voluntaria cesión de ellos, « ó en que los bienes ó efectos de un « deudor oculto ó ausente, hayan sido em- « bargados por orden judicial, como á

« casos en que haya tenido lugar una ban-
« carrota conforme á las leyes».

Esta es una ley vigente de los Estados Unidos.

Sr. Bazán—¿Y qué tiene que ver con eso?

Sr. Frías (U.)—(Leyendo «*A que per-
« sonas se aplica*): La preferencia dada
« en casos de insolvencia, etc., por la
« sección 5.^a de la ley de 3 de marzo de
« 1797, no se limita á los empleados de
« rentas y personas responsables por los
« caudales públicos, sino que se extiende
« á los deudores de los Estados Unidos,
« generalmente.

« La prioridad á favor de los Estados
« Unidos, es inherente, tanto respecto á
« deudas de plazo vencido, cuanto res-
« pecto á aquellas pagaderas ya, cuando
« la muerte ó la insolvencia tiene lugar».

Sr. Bazán—Las mercaderías de los
deudores, fíjese en lo que lee.

Sr. Frías (U.)—De los deudores, sí,
señor.

Aquí hay otra ley, además; *prioridad
de los Estados Unidos*.

«En todos los casos de insolvencia, ó
« cuando los bienes en poder de los eje-
« cutores, administradores ó apoderados,
« sean insuficientes para pagar todas las
« deudas del difunto, la deuda ó deudas á
« favor de los Estados Unidos, por cual-
« quier pagaré por derechos, se satisfarán
« primero, y cualquier ejecutor, adminis-
« trador ó apoderado ú otra persona, que
« pague alguna deuda de la persona ó bie-
« nes por quien ó por qué proceden, antes
« que la deuda ó deudas á los Estados
« Unidos, haya sido primero debidamente
« satisfecha y pagada, serán responsables
« en su persona y bienes, por la deuda ó
« deudas á favor de los Estados Unidos, ó
« por la parte que quede insoluta».

Sr. Bazán—La misma cosa tenemos
aquí.

Sr. Frías (U.)—No es la misma cosa;
allá el crédito de los Estados Unidos se
prefiere á todos los demás.

«Los fiadores, apoderados, etc., que pa-
« guen á los Estados Unidos la cantidad
« debida por el pagaré, se subrogan en la
« prioridad reservada arriba á los Estados
« Unidos».

Sr. Bazán—Es el privilegio del fisco,
que se echa sobre los bienes del deudor;
pero no puede apoderarse de los bienes
de un tercero.

Sr. Frías (U.)—Sobre todos los bienes
que tenga el deudor.

El señor senador decía que había una
verdadera expoliación, cobrándose dere-
chos de aduana anteriores, en mercaderías

que no pertenecen al introductor. A este
respecto, ya he hecho antes presente al
señor senador, que en todas partes se
considera al consignatario como pro-
pietario de la mercaderías, y voy á citarle
algunas decisiones de la corte suprema
de los Estados Unidos, sobre el particular:

«El consignatario se considera para los
« efectos de la ley de impuestos, propieta-
« rio de las mercaderías, y, á menos que
« lo contrario se haya establecido, se re-
« puta que otorgó la obligación ó pagaré
« por los derechos, como principal».

Otra decisión.—«El consignatario secon-
« sidera como el propietario».—«El consig-
« nante no se considera deudor por los
« derechos de las mercaderías».

Estas citas son tomadas del digesto na-
cional de Abbot. Cuando se tiene talento
y saber, como el señor senador por La
Rioja, se pueden presentar las cuestiones,
aunque claras, bajo un punto de vista dis-
tinto y que puede alucinar, pero la verdad
es, que lo que establecen las ordenan-
zas de aduana, y la reforma que pro-
pone y sostiene la comisión, es lo mis-
mo que lo que se hace en todas partes del
mundo, y que es una cosa muy justa y muy
conveniente, que se practica todos los
días en las relaciones ordinarias entre co-
merciales, según el código de comercio.

Sr. Bazán—Si me fuera permitida la
palabra, contestaría brevemente.

Sr. Presidente—Podrá hacer uso de
la palabra el señor senador, después de un
cuarto intermedio.

—Se pasó á un cuarto intermedio.

—Vueltos á sus asientos los señores
senadores, continuó la sesión con la lectura
de un mensaje del poder ejecutivo some-
tiendo un proyecto de ley, por el cual se
le autoriza para que preste su aprobación
á los «Estatutos de la Compañía de Tierras
del Ferrocarril Central Argentino», con las
reformas que en el mismo se determinan.

(Se destinó á la comisión del interior.)

Sr. Bazán—Poco tengo que decir aho-
ra, en contestación á la réplica del señor
miembro informante, pues no ha hecho
otra cosa en toda su exposición, que con-
firmar los principios que había sostenido
anteriormente con la lectura que ha hecho
de las leyes de los Estados Unidos. En
efecto, señor presidente, por los textos
leídos, si se ha fijado un poco la atención
del senado, se verá que esos privilegios
que se acuerdan al fisco en los Estados
Unidos, sobre los deudores al estado, se
hacen única y exclusivamente efectivos
sobre los bienes de los deudores; y no se

me mostrará en todas las citas que se han hecho, una que demuestre que esos privilegios se entienden ó pueden aplicarse sobre los bienes de un tercero, que no tenga relaciones de derecho con dichos deudores.

Tan cierto es esto, que por la sentencia de la suprema corte, á que antes me he referido, se verá que si se hubiese dado la inteligencia que el señor senador da á las leyes que ha citado, la corte de los Estados Unidos por medio de su juez Story, no emplearía en el fallo á que me he referido, explícita y teminadamente, palabras tan aplicables al caso que ahora discutimos, es á saber:—que los Estados Unidos no tienen privilegio alguno para el cobro de derechos adeudados, sobre las mercaderías que están en la aduana, cuando los derechos sean adeudados por otras mercaderías anteriormente importadas.

Me parece que en cuanto á la vigencia de este principio, en la gran república, nada se puede observar; y es precisamente éste el mismo que yo deseo ver aceptado por nuestra legislación aduanera, porque es el más justo y el más fundado en la razón y en la equidad.

Nótese, además, que la adopción de este principio viene á hacer también efectiva la prescripción de nuestra carta fundamental, que consagra la inviolabilidad de la propiedad, prescripción que aquí vendríamos á abolirla en nombre nada más que de una conveniencia problemática para el fisco.

En mi exposición anterior, he hecho presente, que nunca las conveniencias deben inducirnos á violar las leyes, la moral, ni la justicia; y esta violación, si alguna vez puede decirse que tiene lugar, es en el caso en que, tratándose de una operación lícita, cometida á un comerciante, como es la de consignarle una cantidad de mercaderías, para que ese comisionista las venda ó les dé la dirección que se quiera, viniese á encontrarse el remitente con una ley que va á confiscarle sus mercaderías, en virtud de una deuda anterior, contraída por ese comisionista, que no tiene relación alguna con las mercaderías de que se trata.

El señor senador por Tucumán, se ha referido á disposiciones del código de comercio, que establecen que los comitentes no tienen relación alguna de derecho, con la persona que trata con el comisionista. He aquí, pues, una consideración más para que no demos al fisco, que es el único que trata con el comisionista, derecho para venir á apoderarse de una propiedad que pertenece á un tercero, con quien dicho fisco no ha tratado ni conoce.

Seamos, pues, lógicos y consecuentes

con esta prescripción del código comercial, que tiene en su apoyo la sanción universal.

El señor senador se refería también á otro artículo del código, que si lo meditara atentamente, y penetra en su texto, ya que no en su espíritu, vería que estas mercaderías consignadas, no responden, según nuestra legislación, á otras obliciones que á las que se determinan en el artículo 384 que vuelvo á leer, señor presidente, para que esta verdad se grave en el espíritu de los señores senadores que no hayan tenido presente esta disposición.

—Se leyó otra vez el artículo.

He explicado ya, de qué clase eran estas anticipaciones. Dije que cuando se mandan efectos á consignación, antes que lleguen á su destino, el comerciante á quien van consignados, anticipa por dos terceras partes de su valor, y es claro que esta anticipación tiene que pagarse con esas mercaderías.

Además, hay que pagar los gastos de transporte, de conservación y demás gastos legítimos de los derechos que adeuden esas mercaderías, así como de las comisiones y de los intereses respectivos, de que habla ese artículo. Todo esto es justo; pero fuera de esto, todo gravamen que quiera imponerse á esa propiedad, no es justo, no es lícito, señor presidente.

Yo creo, pues, que si adoptamos este principio que, como se ha visto, no ha tenido inconveniente alguno en su aplicación en los Estados Unidos, nación que debe servirnos de modelo, como lo ha sido de nuestras instituciones políticas, en lo que se refiere á lo comercial, habremos hecho muy bien, puesto que conocemos que su comercio es tan próspero, tan fácil y extenso, ni habremos tampoco perjudicado en manera alguna nuestros intereses, adoptando las disposiciones que allí rigen sobre la materia.

No es exacto que en los Estados Unidos el fisco tenga privilegio sobre mercaderías que están á despacho en las aduanas, por deudas de los consignatarios: no es exacto tampoco que, por no tener este privilegio, se perjudique el fisco en los Estados Unidos, puesto que allí, según las disposiciones que ha citado el señor senador, hay privilegios fiscales, lo mismo que entre nosotros.

Aquí, todo deudor al fisco, es decir, toda persona inmediatamente obligada para con el fisco, responde con sus intereses, teniendo éste preferencia respecto de otros acreedores menos privilegiados; y si en los Estados Unidos no ha habido inconveniente alguno en la adopción de

este principio, ¿por qué nosotros querríamos ampliarlo de tal modo, que se vaya á sancionar la usurpación y el robo?

No es cierto, señor presidente, que las mercaderías mandadas en comisión, se conviertan en bienes del comisionista, para que éste pueda disponer de ellas libremente. No señor, aquí en el código de comercio, en el capítulo de las consignaciones, está expresamente prohibido que el comisionista pueda comprarlas sin expreso consentimiento del comitente. Así es que el comisionista tiene que realizar esa operación con toda buena fe con un tercero, y haciendo esta operación, tiene que llenar todas las instrucciones que haya recibido de su comitente, á quien corresponde con pleno derecho la cosa, antes de venderla, y cuando la vende, el saldo, después de haber satisfecho todos los gastos legítimos que la operación haya ocasionado.

Se comprenden cuáles serían los desastrosos efectos que vendría á causar este sistema de la comisión, si nosotros lo adoptáramos. ¿Qué comerciante de Europa no se hallaría vacilante sobre si le convenía ó no mandar un cargamento, consignado á un comerciante de esta plaza, ante el peligro que muy bien podía realizarse, de que cuando llegara aquí ese cargamento, el comisionista se hallara debiendo al fisco una cantidad igual al importe de las mercaderías que el comitente le enviara?

Sr. Frías (U.)—Entonces, ese comisionista no podría introducir un nuevo cargamento á su nombre.

Sr. Bazán—Es que la primera operación que hace el capitán de un buque, cuando llega al puerto, es presentar el manifiesto general de la carga que conduce, con determinación expresa de la persona á quien viene consignada esa carga, apresurándose á hacer inmediatamente la descarga ó el alige del buque, así que para ello obtiene permiso. Entonces esas mercaderías vendrían á responder de las obligaciones contraídas por el comisionista para con el fisco.

Tan es cierto esto, que estoy diciendo que, en el caso á que antes me había referido, sucedió lo mismo en una operación análoga. Una vez que las mercaderías que había remitido el señor Ocampo á Santiago del Estero, llegaron á la aduana, la aduana se apoderó de ellas para rematarlas ó venderlas; de manera que, habiendo llegado enseguida otras mercaderías consignadas al mismo señor Palacios, no queriendo éste perjudicar al propietario de

ellas, (esto me consta, porque ha acaecido con un deudo mío), el señor Palacios se presentó diciendo que renunciaba á la consignación, que no quería aceptarla. Sin embargo, fueron tan inflexibles en la aplicación de este artículo, siguiendo esa malísima interpretación que se ha dado, que no hubo más remedio que vender las mercaderías, para pagar la deuda que el señor Palacios tenía con el fisco.

Véase, pues, todo el peligro de que vamos á rodear al comercio de buena fe, y si merece ó no este punto, la más seria atención por parte del congreso, para no sancionar un principio que viene á trastornar todas las relaciones comerciales.

Mucho más, señor presidente, podría exponer sobre esta materia, pero temo fatigar la atención de la cámara, y por eso termino aquí, pidiendo al honorable senado se sirva aceptar la modificación que he propuesto al artículo en discusión.

Sr. Frías (U.)—El señor senador por La Rioja insiste en que en los Estados Unidos hay establecido el principio contrario al que la comisión propone que se establezca en la ley de aduana. Esto no es exacto, señor presidente.

Antes he citado, y voy á volver á leer la decisión tomada por la corte suprema de los Estados Unidos.

—Leyó lo siguiente:

« El consignatario se considera, para los efectos de la ley de impuestos, propietario de las mercaderías ».

Según lo que el señor senador quiere establecer, no es así.

Antes no había leído esta otra decisión. (Leyendo): « Es claro, según los principios » y obvio el alcance de varias disposiciones « de los actos del congreso sobre la materia, (es decir, sobre los derechos de aduana), que los derechos de mercaderías importadas constituyen una deuda personal á favor de los Estados Unidos por el importador, independientemente de cualquiera gravamen (lien) sobre las mercaderías, y de cualquier pagaré dado por los derechos. La acción (remedy), para los Estados Unidos, no está limitada al derecho sobre las mercaderías, y á la fianza del pagaré ». (Digesto citado, página 276, tomo 3.º).

Quien quiere, pues, enmendar la plana á los Estados Unidos, es el señor senador por La Rioja. En los Estados Unidos, se considera en la aduana propietario al consignatario; y si no se hace lo mismo en la república, es trastornar todas las relaciones.....

Sr. Bazán—Yo acepto eso mismo.

Sr. Frías (U.)—No, señor.

Sr. Bazán—Yo acepto que esas mercaderías que están en la aduana....

Sr. Frías (U.)—Si el señor senador no me deja hablar....

Sr. Bazán—Perdone el señor senador.

Sr. Frías (U.)—Decía, pues, que allí se considera, y se debe considerar también aquí, como propietario al consignatario, pues de otra manera, es trastornar completamente las relaciones de derecho universalmente establecidas entre los comisionistas y las personas que tratan con ellos.

Ya antes me he referido á las disposiciones del código de comercio: voy ahora á poner un ejemplo: una casa de consignación en ésta, vende á un comerciante de Corrientes una factura, que el consignatario se la entrega, y la lleva á la plaza de su destino. ¿Quién es natural que pague los derechos y responda de ellos: el consignatario que está aquí, ha contratado con la aduana, ó el comprador, ó el verdadero propietario de las mercaderías, si lo hay, que no han intervenido en nada y están ausentes, el uno en Corrientes y el otro en Londres, París, ó quién sabe dónde? Claro es que el consignatario, porque esas son las obligaciones que le imponen las leyes de todas partes, como las de los Estados Unidos; y por eso es que allá como acá, la ley de aduana dice, que el consignatario se considera como propietario de las mercaderías, para sus relaciones con la aduana.

Concluyo repitiendo, que quien quiere enmendar la plana á los Estados Unidos, es el señor senador por la Rioja, y no la comisión.

Sr. Bazán—Parece que no ha querido oír, el señor senador, la cita que he hecho de la sentencia de la corte, en que claramente expone lo siguiente, que voy á volver á leer:

« La suprema corte de los Estados Unidos, dice, declaró en el caso de Harris « V. Dennié, por el órgano de Story, que « pronunció la sentencia en nombre de la « corte, que los Estados Unidos no tienen « privilegio alguno sobre las mercaderías « para el cobro de derechos adeudados « por otras mercaderías, anteriormente « importadas, á pesar de que, allí como « entre nosotros, por la ordenanza de « aduana se reputa por la ley, para los « efectos del impuesto, como propietario « de las mercaderías, á las personas á quienes dichas mercaderías hayan sido consignadas, y se manda, también, como

« en la ordenanza nuestra, que á ningún « deudor que haya dejado de cumplir las « obligaciones del impuesto, le sea hecho « crédito en lo futuro, por derechos en las « aduanas de los Estados Unidos, mientras « tales obligaciones no sean pagadas y « canceladas». Curtis Reports, t. 8.º, página 425.

Véase, pues, si refiriéndome yo á esto, quiero enmendar la plana ó es el señor senador quien quiere enmendar la plana á la corte de la República Argentina, bajo cuya firma se halla esto que acabo de leer, y que pueden leerlo otros señores senadores, que quizá no la hayan tenido en sus manos.

No diré más.

Sr. Frías (U.)—Yo concluiré con muy pocas palabras.

Yo también he leído una decisión de los Estados Unidos, referente á lo mismo que el señor senador acaba de leer; puede ser que una sea anterior y otra posterior; pero esta decisión está en el digesto de Abbot, que el señor senador puede ver.

Sr. Bazán—Eso no se opone en manera alguna, y pido, señor presidente, para que puedan verificarla los señores senadores con más detención, leyendo originalmente estas referencias, que quede este punto pendiente para otra sesión; es demasiado grave para que se de una resolución, tal vez precipitada, en vista de estas contradicciones en que estamos con el señor senador, miembro informante de la comisión.

Si los señores senadores quisieran aceptar este temperamento....

—Apoyado.

Sr. Frías (U.)—¿Hasta cuándo vamos á discutir esto?

Sr. Bazán—Yo tengo profunda convicción á este respecto.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción del señor senador, está en discusión, si se suspende la consideración de este artículo hasta la próxima sesión, sin perjuicio de continuar la consideración de los otros.

Sr. Bustamante—Me parece que no hay que continuar; es el único punto que está en discusión.

Sr. Bazán—Pido entonces que se levante la sesión, porque puedo hacer algunas observaciones sobre otros artículos también, ó pedir explicaciones.

Sr. Presidente—Se votará la moción del señor senador por La Rioja, si se sus-

pende la consideración ~~de~~ este artículo, levantándose en seguida la sesión.

—Se votó, y resultó afirmativa de doce votos contra ocho.

Sr. Presidente—Quiere decir que

queda suspendida la consideración del artículo hasta la próxima sesión, y el resto de la ley como orden del día.

—Así quedó resuelto, levantándose la sesión á las cuatro y media de la tarde.